

mino municipal de Talarrubias (Badajoz), con destino al riego de 49,85 hectáreas de la finca de su propiedad denominada «Casasola», sin que pueda derivarse un volumen anual superior a 6.000 metros cúbicos por hectárea realmente regada y con sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—Las obras se ajustarán al proyecto que ha servido de base a la tramitación de la concesión y que por esta Resolución se aprueba, a efectos concesionales, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Gonzalo Saubrier González, visado por el Colegio Oficial con el número 69.089 en 19 de abril de 1977 y cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 4.538.058 pesetas.

La Comisaría de Aguas del Guadiana podrá autorizar pequeñas modificaciones que, sin alterar la esencia de la concesión, tiendan a mejorar el proyecto.

Segunda.—Las obras comenzarán en el plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación de esta autorización en el «Boletín Oficial del Estado» y deberán quedar terminadas en el plazo de dieciocho meses a partir de la misma fecha.

La puesta en riego de la totalidad de la superficie a regar deberá efectuarse en el plazo máximo de un año a partir de la terminación de las obras.

Tercera.—La Administración no responde del caudal que se concede y podrá obligar a la concesionaria a la instalación, a su costa, de los dispositivos de control o limitación de caudal de las características que se establezcan.

La Administración no garantiza la existencia del nivel necesario en el embalse para poder alimentar la toma.

El Servicio comprobará especialmente que el volumen utilizado por la concesionaria no excede en ningún caso del que se autoriza, sin que pueda ser superior a los 6.000 metros cúbicos por hectárea realmente regada y año.

De acuerdo con los datos que figuren en el acta de reconocimiento final de las obras, se establecerá el tiempo de funcionamiento de los grupos elevadores para derivar los volúmenes concedidos.

Cuarta.—La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante su construcción como en el período de explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la Comisaría de Aguas del Guadiana, siendo de cuenta de la concesionaria las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes, debiendo darse cuenta a dicho Organismo del comienzo de los trabajos. Una vez terminados, y previo aviso de la concesionaria, se procederá a su reconocimiento por el Comisario Jefe o Ingeniero del Servicio en quien delegue, levantándose acta en la que conste el cumplimiento de estas condiciones y relacionándose en ella las características de la maquinaria instalada en el aprovechamiento, sin que pueda comenzar la explotación antes de aprobar este acta la Dirección General de Obras Hidráulicas.

Quinta.—Se concede la ocupación de los terrenos de dominio público necesarios para las obras. Las servidumbres legales serán decretadas, en su caso, por la autoridad competente.

Sexta.—El agua que se concede queda adscrita a la tierra, quedando prohibida su enajenación, cesión o arriendo con independencia de aquélla.

Séptima.—La Administración se reserva el derecho a tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para toda clase de obras públicas en la forma que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de aquélla.

Octava.—Esta concesión se otorga por un plazo de noventa y nueve años a partir de la fecha de aprobación del acta de reconocimiento final, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

Novena.—La Comisaría de Aguas del Guadiana podrá acordar la reducción del caudal cuyo aprovechamiento se autoriza, e inclusive suspender totalmente el aprovechamiento durante el período comprendido entre el 1 de julio y 30 de septiembre, en el caso de no quedar caudal disponible, una vez atendidos otros aprovechamientos preexistentes o preferentes del río Guadiana, lo que comunicará al Alcalde de Talarrubias (Badajoz), para la publicación del correspondiente edicto para conocimiento de los regantes.

Diez.—Esta concesión queda sujeta al pago del canon que en cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo con motivo de las obras de regulación de la corriente del río realizadas por el Estado y que proporcionen o suplan las aguas utilizadas en este aprovechamiento, sin que el ábono de este canon, ni la propia concesión en sí, otorguen ningún derecho a la concesionaria para intervenir en el régimen de regulación de la cuenca.

Once.—Cuando los terrenos que se pretende regar queden dominados en su día por algún canal construido por el Estado, quedará caducada esta concesión, pasando a integrarse aquéllos en la nueva zona regable y quedando sujetos a las nuevas normas económico-administrativas que se dicten con carácter general y sin derecho a indemnización alguna.

Doce.—Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigentes o que se dicten en lo sucesivo, relativas a la industria nacional, contrato de trabajo, Seguridad Social y demás de carácter laboral, administrativo o fiscal.

Trece.—La concesionaria queda obligada a cumplir, tanto en la construcción como en la explotación, las disposiciones

de la Ley de Pesca Fluvial para la conservación de las especies.

Catorce.—La autorización para el trabajo en zonas de policía de vías públicas deberá recabarse de la autoridad competente.

Quince.—La concesionaria queda obligada al cumplimiento de lo que se dispone en los artículos 31 y 33 del Reglamento de 13 de diciembre de 1924 («Gaceta» del 19) sobre preceptos referentes a la lucha antipalúdica.

Dieciséis.—La concesionaria será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse a intereses públicos o privados como consecuencia de las obras que se autorizan, quedando obligada a su indemnización y a realizar los trabajos que la Administración le ordene para la extracción de los escombros vertidos al cauce durante las mismas, así como a su conservación en buen estado.

Diecisiete.—El depósito constituido quedará como fianza a responder del cumplimiento de estas condiciones y será devuelto después de ser aprobada el acta de reconocimiento final de las obras.

Dieciocho.—Caducará esta concesión por incumplimiento de cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose la caducidad según los trámites señalados en la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Madrid, 28 de febrero de 1980.—El Director general, por delegación, el Comisario central de Aguas, José María Gil Egea.

8349

*RESOLUCION de la Dirección General de Puertos y Costas por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, número 34.664.*

En el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, seguido ante el Tribunal Supremo, con el número 34.654/78, interpuesto por don Daniel Perelló Chofre, contra la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valencia el 6 de octubre de 1978 en el recurso número 320/77, promovido por el mismo recurrente, contra resolución de 3 de marzo de 1977, sobre demolición de obras en la playa de Piles, se ha dictado sentencia con fecha 3 de noviembre de 1979, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que debemas desestimar y desestimamos el presente recurso de apelación interpuesto por don Daniel Perelló Chofre, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, de seis de octubre de mil novecientos setenta y ocho, la cual confirmamos íntegramente; todo ello sin expresa condena en costa a esta apelación.»

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Director general, Carlos Martínez Cobolla.

Señor Jefe Regional de Costas y Puertos.

8350

*RESOLUCION de la Dirección General de Puertos y Costas por la que se hace pública la legalización otorgada por Orden ministerial de 27 de febrero de 1980 a «Cala Nova Hotelera, S. A.», con las obras de toma de agua y desagüe de piscina, ocupando 164 metros cuadrados de terrenos de dominio público de la zona marítimo-terrestre en Cala Nova, término municipal de Santa Eulalia del Río (Ibiza).*

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas, en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 6 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23) ha otorgado con fecha 27 de febrero de 1980 una autorización a «Cala Nova Hotelera, S. A.», cuyas características son las siguientes:

Provincia: Baleares.

Término municipal: Santa Eulalia del Río (Ibiza).

Superficie aproximada: 164 metros cuadrados.

Destino: Legalización de las obras de toma de agua y desagüe de piscina en terrenos de dominio público de la zona marítimo-terrestre, en Cala Nova.

Plazo concedido: Diez años.

Canon: 30 pesetas por metro cuadrado y año.

Prescripciones: Todas las zanjas excavadas para la colocación de las tuberías deberán recubrirse superficialmente de piedras naturales del lugar y de manera que no se advierta alteración alguna con respecto al terreno natural.

Las tuberías de desagüe deberán prolongarse de acuerdo con el plano de confrontación, debiendo quedar, además, de manera no visible.

Las aguas que se vierten al mar estarán exentas de detergentes o cualquier producto que pueda perjudicar la flora y fauna marina y deberá cumplir las especificaciones dispuestas por los Organismos competentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.  
Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Director general, Carlos Martínez Cebolla.

8351

*RESOLUCION de la Dirección General de Puertos y Costas por la que se hace pública la legalización otorgada por Orden ministerial de 27 de febrero de 1980 a don Miguel Carretero Gomila, de las obras de escalera y plataforma, ocupando 22 metros cuadrados de terrenos de dominio público de la zona marítimo-terrestre, en Na Macaret, término municipal de Mercadal (Menorca).*

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas, en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 6 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23), ha otorgado con fecha 27 de febrero de 1980 una autorización a don Miguel Carretero Gomila, cuyas características son las siguientes:

Provincia: Baleares.

Término municipal: Mercadal (Menorca).

Superficie aproximada: 22 metros cuadrados.

Destino: Legalización de las obras de escalera y plataforma en el dominio público de la zona marítimo-terrestre en Na Macaret.

Plazo concedido: Diez años.

Canón: 20 pesetas por metro cuadrado y año.

Prescripciones: Las escaleras y plataforma serán de uso público gratuito.

El titular o beneficiario de las obras a que se refiere la presente autorización vendrá obligado a colocar o suprimir carteles, para destacar el carácter de libre uso público gratuito de dichas obras, o bien evitar una falsa interpretación de zona privada o de uso restringido.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Director general, Carlos Martínez Cebolla.

8352

*RESOLUCION de la Dirección General de Puertos y Costas por la que se hace pública la legalización otorgada por Orden ministerial de 27 de febrero de 1980 a don Emilio Pechuán Porres de las obras de embarcadero y terraza, ocupando 18 metros cuadrados de terrenos de dominio público de la zona marítimo-terrestre en Roca Baixa, término municipal de San Antonio Abad (Ibiza).*

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas, en uso de las facultades Delegadas por Orden ministerial de 6 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23), ha otorgado con fecha 27 de febrero de 1980 una autorización a don Emilio Pechuán Porres, cuyas características son las siguientes:

Provincia: Baleares.

Término municipal: San Antonio Abad (Ibiza).

Superficie aproximada: 18 metros cuadrados.

Destino: Legalización de las obras de embarcadero y terraza en terrenos de dominio público de la zona marítimo-terrestre en Roca Baixa.

Plazo concedido: Diez años.

Canón: 40 pesetas por metro cuadrado y año.

Prescripciones: Todas las obras objeto de la presente concesión serán de uso público gratuito.

El titular o beneficiario de las obras a que se refiere la presente autorización vendrá obligado a colocar o suprimir carteles para destacar el carácter de libre uso público gratuito de dichas obras, o bien evitar una falsa interpretación de zona privada o de uso restringido.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Director general, Carlos Martínez Cebolla.

8353

*RESOLUCION de la Dirección General de Puertos y Costas por la que se hace pública la legalización otorgada por Orden ministerial de 27 de febrero de 1980 a «Don Alvaro Libano Pérez-Ullibarri e hijas» de las obras de piscina y obras anexas, ocupando 330 metros cuadrados de terrenos de dominio público de la zona marítimo-terrestre, en Cala d'Olivera urbanización «Roca Llisa», término municipal de Santa Eulalia del Río (Ibiza).*

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 6 de

junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23), ha otorgado con fecha 27 de febrero de 1980 una autorización a don Alvaro Libano Pérez-Ullibarri e hijas, cuyas características son las siguientes:

Provincia: Baleares.

Término municipal: Santa Eulalia del Río (Ibiza).

Superficie aproximada: 330 metros cuadrados.

Destino: Legalización de las obras de piscina y obras anexas (muro de contención y plataforma y escaleras) en el dominio público de la zona marítimo-terrestre en Cala d'Olivera.

Plazo concedido: Diez años.

Canón: 30 pesetas por metro cuadrado y año.

Prescripciones: La piscina y demás obras construidas en terrenos de dominio público serán de uso público gratuito.

El peticionario deberá construir, a su costa, dos escaleras con las dimensiones y situación que se señala en el plano de confrontación, y características que indique la 6.ª Jefatura Regional de Costas y Puertos, para permitir el acceso a la piscina desde la zona de dominio público contigua.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Director general, Carlos Martínez Cebolla.

8354

*RESOLUCION de la Dirección General de Puertos y Costas por la que se hace pública la legalización otorgada por Orden ministerial de 27 de febrero de 1980 a «Hotel Nautilus, S. A.», de las obras de muro de hormigón, «solariums» y desagüe para piscina, ocupando 845 metros cuadrados de terrenos de dominio público de la zona marítimo-terrestre y de mar litoral en Port des Torrent, término municipal de San José (Ibiza).*

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas, en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 6 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23), ha otorgado con fecha 27 de febrero de 1980 una autorización a «Hotel Nautilus, S. A.», cuyas características son las siguientes:

Provincia: Baleares.

Término municipal: San José (Ibiza).

Superficie aproximada: 845 metros cuadrados.

Destino: Legalización de las obras de muro hormigón, «solariums» y desagüe con trampilla para piscina, en el dominio público y en el mar litoral, en Port des Torrent.

Plazo concedido: Diez años.

Canón: 30 pesetas por metro cuadrado y año.

Prescripciones: Las aguas que evacuen al mar a través del desagüe serán exclusivamente las de la piscina, y no causarán daños ni perjuicios a la fauna y flora marítimas. En todo caso, las aguas citadas cumplirán con las condiciones higiénicas sanitarias que al respecto tengan establecidas y en especial lo dispuesto en la Orden ministerial del Ministerio de la Gobernación de 31 de marzo de 1978.

Las obras de la presente autorización serán de uso público gratuito.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Director general, Carlos Martínez Cebolla.

## MINISTERIO DE EDUCACION

8355

*ORDEN de 28 de diciembre de 1979 por la que se autoriza al Centro de Enseñanza General Básica «Liceo San Luis», de Leganés (Madrid), el funcionamiento de una Sección de Formación Profesional de primer grado.*

Ilmo. Sr.: Vista la petición formulada por el Director de Centro docente de Educación General Básica «Liceo San Luis» de Leganés (Madrid), calle San Julio, 8, La Fortuna, para que se le autorice una Sección de Formación Profesional de primer grado;

Teniendo en cuenta que reúne los requisitos a que se refiere el artículo 30 del Decreto 707/1976, de 5 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 12 de abril) y que ha sido informado favorablemente por el Coordinador de Formación Profesional y la propuesta también favorable del Delegado Provincial de Educación,

Este Ministerio ha resuelto autorizar al Centro docente de Educación General Básica «Liceo San Luis», de Leganés (Madrid), calle San Julio, 8, La Fortuna, el funcionamiento de una Sección de Formación Profesional de primer grado con las enseñanzas siguientes a partir del curso académico 1979/80: Rama «Administrativa y Comercial», profesiones «Administrativa y Secretariado»; rama «Electricidad», profesión «Electrónica».